Asunto C-40/20

Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia

Fecha de presentación:

23 de abril de 2020

Órgano jurisdiccional remitente:

Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia)

Fecha de la resolución de remisión:

30 de enero de 2020

Partes recurrentes:

AQ

BO

CP

Partes recurridas:

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidencia del Consejo de Ministros)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ministerio de Educación, Universidades e Investigación) — MIUR

Università degli studi di Perugia

Objeto del procedimiento principal

Recursos de apelación interpuestos ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) contra la sentencia del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Umbria) (en lo sucesivo, «TAR Umbria»), mediante la cual dicho órgano jurisdiccional desestimó los recursos interpuestos por los recurrentes contra las decisiones por las cuales la Università di Perugia denegó sus solicitudes de convocatoria de un procedimiento de contratación de personal por tiempo indefinido para la citada universidad, y contra la Circular n.º 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione (Ministro de Administraciones Públicas y Simplificación Administrativa) a tal respecto, en los que se solicita que se declare su derecho a ser contratados por tiempo indefinido como investigadores y a que se les someta al procedimiento de evaluación previsto en el artículo 24, apartado 5, de la Ley n.º 240 de 2010, para su inclusión en el escalafón de profesores asociados.

Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial

Compatibilidad del artículo 24, apartados 5 y 6, de la Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, con la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada adjunto a la Directiva 1999/70/CE, en relación con los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la luz de los principios de equivalencia y efectividad.

Cuestión prejudicial

¿Se opone la cláusula 4 del Acuerdo Marco adjunto a la Directiva n.º 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuyo título es «*Principio de no discriminación*», en relación con los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la luz de los principios de equivalencia y efectividad, a una normativa nacional, como la recogida en [el artículo] 24, apartados 5 y 6, de la Ley n.º 240 de 2010, que reconoce a los investigadores con contrato de duración determinada a los que se refiere el artículo 24, apartado 3, letra b), que hayan obtenido la habilitación científica nacional indicada en el artículo 16 de esa misma ley, y a los investigadores con contrato por tiempo indefinido que hayan obtenido asimismo la citada habilitación, respectivamente, el derecho y la posibilidad (mediante la asignación de los recursos correspondientes) de someterse —los primeros, al vencimiento de su contrato, y los segundos, hasta el 31 de diciembre de 2021— a un procedimiento de evaluación específico con vistas a su inclusión en el escalafón de profesores asociados, mientras que no se reconoce ningún derecho ni posibilidad análogos a los investigadores con contrato de duración determinada mencionados en el artículo 24, apartado 3, letra a), que estén en posesión de la habilitación científica nacional, aun cuando en todos los casos se trate de trabajadores indistintamente llamados a desempeñar las mismas funciones?

Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

Como se indicaba de forma detallada en la resolución de remisión anterior dictada en el mismo procedimiento nacional, a la que se remite, las disposiciones del Derecho de la Unión invocadas son las siguientes:

Artículo 155 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (en lo sucesivo, «Directiva 1999/70»), en particular, las cláusulas 5 y 4 del Acuerdo anexo a la misma y los considerandos 3, 14 y 15 de la citada Directiva.

Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación de investigadores (2005/251/CE).

Disposiciones de Derecho nacional invocadas

Como se indicaba de forma detallada en la resolución de remisión anterior dictada en el mismo procedimiento nacional, a la que se remite, las disposiciones del Derecho nacional invocadas son las siguientes:

Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» (Ley n.º 240, de 30 de diciembre de 2010, por la que se establecen normas en materia de organización de las universidades, de personal académico y contratación y por la que se delegan facultades al Gobierno para fomentar la calidad y la eficiencia del sistema universitario; en lo sucesivo, «Ley n.º 240/2010»), en particular el artículo 24, apartados 1 a 3, 5 y 6.

Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, «Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]» (Decreto Legislativo n.º 75, de 25 de mayo de 2017, por el que se modifica y complementa el Decreto Legislativo n.º 165 de 30 de marzo de 2001; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 75/2017»), en particular, el artículo 20.

Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Decreto Legislativo n.º 165, de 30 de marzo de 2001; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 165/2001»), que recoge el código orgánico del personal laboral de la Administración Pública, en particular, los artículos 3, apartado 2, y 36, en su redacción en vigor a partir del 22 de junio de 2017.

Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni [...]» (Decreto Legislativo n.º 81, de 15 de junio de 2015, «Regulación orgánica de los contratos de trabajo y modificación de la normativa en materia de funciones [...]); en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 81/2015»), por el que se transpone al Derecho interno la Directiva 1999/70/CE, en particular, el artículo 19, en su versión aplicable al presente asunto y anterior a la modificación introducida por el Decreto-ley n.º 87/2018, y el artículo 29, apartado 2, letra d), del Decreto Legislativo de que se trata, en vigor desde el 12 de agosto de 2018.

Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal

- 1 Tras la publicación de la resolución de remisión anterior dictada en el mismo procedimiento nacional —a la que se remite para la exposición de los hechos— en los tres procedimientos de que se trata intervinieron, en apoyo de las pretensiones de los recurrentes, varias asociaciones profesionales y sindicales, a saber, ANIEF — Associazione Professionale e Sindacale, la Federazione Lavoratori della Conoscenza — CGIL y CIPUR — Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo, que solicitan que se autorice su intervención en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
- 2 Además, los recurrentes han presentado un nuevo escrito en el que, en el ámbito de los tres recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del TAR Umbria, formulan un motivo de recurso adicional común.

Alegaciones esenciales de las partes en el procedimiento principal

- 3 Mediante el mencionado motivo de recurso adicional, las partes recurrentes aducen que se ha infringido la cláusula 4 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70 y se ha vulnerado el principio de no discriminación contenido en ella, basándose en que han obtenido la habilitación científica nacional de segundo nivel para poder integrarse en el escalafón de profesores asociados prevista en el artículo 24, apartados 5 y 6, de la Ley n.º 240/2010.

Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial

- 4 El órgano jurisdiccional remitente cita fundamentalmente la sentencia de 25 de octubre de 2018, Sciotto (C-331/17), en la que el Tribunal de Justicia declaró que «al no permitir en ningún caso, en el sector de actividad de las fundaciones líricas y sinfónicas, la transformación de los contratos de trabajo de duración determinada en contratos de duración indefinida, la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede suponer una discriminación entre los trabajadores de duración determinada del citado sector y los trabajadores de duración determinada de los demás sectores, que, previa recalificación de su contrato de trabajo en caso de infracción de las normas relativas a la celebración de contratos de duración determinada, pueden pasar a ser trabajadores con contrato de duración indefinida comparables en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco».
- 5 El órgano jurisdiccional remitente menciona también la sentencia de 20 de junio de 2019, Ustariz Aróstegui (C-72/18), en la que el Tribunal de Justicia, recordando su jurisprudencia, afirmó que «el concepto de “razones objetivas” requiere que la desigualdad de trato apreciada esté justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes, a fin de verificar si dicha desigualdad responde a una

necesidad auténtica, si permite alcanzar el objetivo perseguido y si resulta indispensable al efecto. Tales elementos pueden tener su origen, en particular, en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran los contratos de duración determinada y en las características inherentes a las mismas o, eventualmente, en el objetivo legítimo de política social que se proponga conseguir el Estado miembro» y que, por tanto, «la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que reserva el derecho a un complemento retributivo a los profesores funcionarios de carrera, excluyendo, en particular, a los profesores contratados administrativos, si haber cubierto un determinado tiempo de servicios constituye el único requisito para la concesión de dicho complemento».

- 6 En lo que respecta a las partes recurrentes, la presunta discriminación se ha producido en el mismo sector laboral, a saber, el de los investigadores universitarios.
- 7 El juez remitente expone que las tres categorías de investigadores universitarios previstas en el ordenamiento jurídico —es decir, los investigadores con contratos regulados por el artículo 24, apartado 3, letra a), de la Ley n.º 240/2010 (en lo sucesivo, «investigadores de tipo A»); los investigadores con contratos regulados por el artículo 24, apartado 3, letra b), de la Ley n.º 240/2010 (en lo sucesivo, «investigadores de tipo B»), y los investigadores con contrato indefinido— desempeñan funciones idénticas (docencia, actividades complementarias, atención a los estudiantes, labores de investigación, etc.).
- 8 Sin embargo, los investigadores de tipo A, pese a desarrollar las mismas funciones que los investigadores de las otras categorías y haber aprobado una oposición de la misma dificultad y sujeta a los mismos criterios de selección que la superada por estos últimos, no pueden acceder a la carrera de profesor asociado de segundo nivel, a la que solo tienen acceso los investigadores pertenecientes a las otras dos categorías, de conformidad con el artículo 24, apartado 5, y 6, de la Ley n.º 240/2010. El juez remitente precisa, además, que el procedimiento previsto en el citado apartado 6 es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2021, en virtud de la prórroga establecida en el artículo 5, apartado 1, letra b), del Decreto-ley n.º 126, de 29 de octubre de 2019.
- 9 En consecuencia, aunque haya obtenido la habilitación científica nacional y su contrato haya sido prorrogado por un término de dos años tras la evaluación positiva de sus actividades, el investigador de tipo A perderá su trabajo al vencimiento de su contrato sin ningún motivo racional y no discriminatorio que lo justifique.
- 10 La presunta discriminación de que se trata se ve agravada por los planes extraordinarios de contratación de profesores asociados, introducidos mediante el Decreto Ministerial n.º 364, de 2019, que tienen por objeto fomentar la progresión

en la carrera exclusivamente para los investigadores con contrato por tiempo indefinido que estén en posesión de la habilitación científica nacional.

- 11 A la luz de todo lo anterior, el órgano jurisdiccional remitente ha decidido plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial adicional antes indicada, que se añade a las formuladas en la resolución de remisión anterior dictada por el mismo juez en el mismo procedimiento nacional.

DOCUMENTO DE TRABAJO